



América Latina Hoy

ISSN: 1130-2887

latin hoy@usal.es

Universidad de Salamanca
España

Van Cott, Donna Lee

Los movimientos indígenas y sus logros: la representación y el reconocimiento jurídico en los Andes

América Latina Hoy, núm. 36, abril, 2004, pp. 141-159

Universidad de Salamanca

Salamanca, España

Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=30803606>

- Cómo citar el artículo
- Número completo
- Más información del artículo
- Página de la revista en redalyc.org

redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

ISSN: 1130-2887

LOS MOVIMIENTOS INDÍGENAS Y
LA REPRESENTACIÓN
JURÍDICO EN LOS ANDES
*Indigenous movements and
and legal recognition in the*

Donna Lee VAN COTT
Universidad de Tennessee
✉ dvancott@utk.edu

BIBLID [1130-2887 (2004) 36, 141-159]
Fecha de recepción: noviembre del 2003
Fecha de aceptación y versión final: febrero del 2004

RESUMEN: Durante la última década se han producido importantes avances en cuanto a la representación política que operaba. El movimiento indígena avanzó en una coyuntura marcada por las reformas constitucionales que tendieron a fortalecer la democracia. La reforma política supuso un contexto institucional que permitió participar en la política convencional. Los movimientos indígenas aprovecharon dichos movimientos para aprovecharse de las reformas y los consiguientes sistemas de descentralización, mas neoliberales y la corrupción.

Palabras clave: indígenas, representación política

ABSTRACT: During the last decade there have been impressive gains in political representation that operated. They did so by taking advantage of the constitutional reform to link their demands with the legitimacy of democratic institutions. The political reform was a favorable context for new political movements, including indigenous movements-. Moreover, in the context of the traditional parties and party system, the movements formed in coalitions against neoliberal reforms.

Key words: indigenous movements, political representation

I. INTRODUCCIÓN*

Uno de los mayores obstáculos para el progreso de la democracia en los Andes es la escasa calidad de la representación política. Tanto los votantes como los agentes sociales colectivos están desligados de las instituciones políticas, en especial de los partidos, los cuales se muestran incapaces de atender a las acuciantes necesidades de la sociedad y de representar a las identidades colectivas más prominentes en el ámbito de la política¹. Este problema se extiende por toda América Latina, pero es más pronunciado en la región de los Andes, donde se manifiesta en el marcado declive del apoyo popular a los partidos políticos². Esta crisis de representación está siendo exacerbada por un contexto económico en el que todas las opciones son dolorosas, en el que la aplicación de determinadas políticas suele acarrear violentas movilizaciones populares y en el que la toma de decisiones se hace cada vez más al margen de los ciudadanos e incluso de los partidos políticos. Aun así, inmersos en este ambiente de crisis y desesperación, los movimientos indígenas han obtenido sustanciales cuotas de representación política al movilizarse con éxito para forzar reformas institucionales que les han conferido derechos políticos especiales y que les han permitido formar, por primera vez, sus propios vehículos electorales. En este ensayo intentaré describir en qué consisten estos logros y explicar el modo en que se produjeron en la década de 1990.

Durante las décadas de 1960 y 1970, los pueblos indígenas de los cinco países de la región andina se agruparon en organizaciones de movilización social como alternativa a los modelos excluyentes de representación política ofrecidos por los partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil que representaban los intereses de mestizos y blancos. Estas organizaciones habían incorporado a los indios en sus filas, pero no fueron capaces de combatir su racismo interno y se negaron a compartir el poder a la hora de tomar decisiones o de atender a sus demandas étnicas y culturales. En la región central de los Andes, a raíz de diferentes motivos, los indígenas empezaron a movilizarse por separado en el Altiplano y en las tierras bajas antes de asociarse en organizaciones y movimientos nacionales unificados. Los indígenas de las tierras altas promovieron una agenda de derechos agrarios y autonomía cultural en las décadas de 1960 y 1970, en regiones densamente pobladas donde el crecimiento demográfico había contribuido a reducir la cantidad de tierra disponible para cada familia. En esos

* Este artículo fue traducido por David Redoli.

1. Existe un gran número de publicaciones que han analizado el escaso grado de institucionalización del sistema de partidos y el consecuente estancamiento político en la región de los Andes, así como el reciente desmoronamiento de los sistemas de partidos en Perú y Venezuela y la fragmentación de los mismos en Bolivia y Ecuador. Véase, por ejemplo, H. DIETZ y D. MYERS (2001); S. LEVITSKY y M. CAMERON (2001); S. MAINWARING y T. SCULLY (1995); K. ROBERTS (2002); A. ROMERO (1994); E. ROSPIGLIOSI (1995); M. TANAKA (1998) y L. WHITEHEAD (2001).

2. Según una encuesta realizada en 1998 en 17 países latinoamericanos por el LATINOBARÓMETRO, sólo un 21% de los encuestados afirmaron tener «mucha» o «alguna» confianza en los partidos políticos, mientras que un 76% dijeron tener «poca» o «ninguna». Los países andinos ocupan la mitad inferior de la tabla en cuestión de respaldo popular (M. ALCÁNTARA y F. FREIDENBERG, 2001: Cuadro IV).

años, las comunidades y organizaciones indígenas han conseguido una representación a la que los partidos políticos al negarse a reconocer la existencia de las tierras bajas, las aisladas comunidades indígenas y la misión de las compañías mineras. En las tierras bajas, las aisladas comunidades indígenas habían formado organizaciones indígenas que se extendían a los cinco países. Después de la década de 1980, las organizaciones internacionales empezaron a dar importancia a los fondos y recursos económicos de Ecuador y Perú³. La repercusión de la crisis de la visión, propagada por los indígenas cuyas culturas estaban desvalorizadas y culturalmente integrada y homogénea, la visión tan abundante constituía un modelo político y de los mitos nacionales.

La Confederación de Naciones Indígenas (CONFENIAE) es probablemente la principal organización indígena resultado de la fusión de tres organizaciones indígenas de Ecuador, *Runacunapac Riccham* (CONFENIAE), creada en 1979 y una de las décadas de 1990, la organización indígena (PRODEPINE, 1998) y era, junto con la sociedad civil mejor organizada⁴. La CONAIE (Confederación Nacional de la Comunidad Indígena en 1990 y 1994) que les otorga la titularidad de terrenos colectivos y la propuesta (Selverston, 2001). La CONAIE que propició la salida del presidente de la nueva Asamblea Nacional Constituyente y las demandas por la CONAIE se han centrado en el apoyo de un número de indígenas favorecidos y de la empobrecida población indígena.

En Bolivia, los indígenas de diferentes movimientos que en o

3. La aportación económica a la región andina de Perú es uno de los objetivos prioritarios de la Fundación Interamericana de los Pueblos Indígenas también colaboran en estos tres países. (Entrevista telefónica con la autora el 29 de abril del 2003).

4. Otras organizaciones nacionales indígenas son los Evangélicos (FEINE), formada en 1980 y los Indígenas y Negros (FENOCIN), establecida en 1985.

comunes. La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), establecida en 1979, tiene afiliados por todo el país, pero es más fuerte en el Altiplano. En los últimos tiempos, su unidad se ha visto amenazada por enconadas disputas internas y por la emergencia de un movimiento que pretende recuperar arcaicas fórmulas étnicas de organización intercomunitaria (el *ayllus*). En las tierras bajas, la mayoría de las comunidades indígenas están ligadas a la Confederación Indígena del Oriente Boliviano (CIDOB), constituida en 1982. Después de 1997, sin embargo, la credibilidad de la organización empezó a ser cuestionada por un sector del movimiento de las tierras bajas, debido a sus lazos de unión con el gobierno. En el 2002, uno de sus miembros más dinámicos, la Coordinadora de Pueblos Étnica de Santa Cruz (CPESC), abandonó la CIDOB y desde entonces ha ido reemplazado a la organización central a la hora de movilizar a la población (léase la entrevista con Carlos Romero, La Paz, 23 de junio del 2002. Rodríguez, 2002)

La CSUTCB y la CIDOB encabezaron importantes movilizaciones a nivel nacional en la década de 1990. La CSUTCB ha obtenido escasos éxitos con su política. El movimiento de los cultivadores de coca dominó la organización desde finales de la década de 1980 hasta 1998. Su oposición a las medidas tomadas por el Estado para erradicar el cultivo les ha proporcionado un amplio respaldo popular, pero ha hecho poco para alterar la política del gobierno. En 1998, el radical *aymara* Felipe Quispe se aprovechó de las desavenencias dentro de la dirección de la CSUTCB para resultar elegido secretario general. Desde entonces ha orquestado una serie de acciones y bloqueos de carreteras que han derivado a menudo en violencia, como medida de presión para que el gobierno proporcione mayores ayudas económicas a los agricultores del Altiplano más desfavorecidos. Muy pocas de las promesas hechas se han cumplido. La CIDOB ha obtenido mayores logros al adoptar una actitud más conciliatoria con el Estado, lo que ha afianzado el acceso de la organización a los círculos políticos y a los recursos. El punto de inflexión tuvo lugar tras una marcha desde Beni hasta La Paz en 1990 que hizo una profunda mella en la élite política de la nación. Sin embargo, esta actitud más pragmática de la CIDOB ha dividido al movimiento indígena. Valga el ejemplo de la marcha organizada por la CIDOB, la CSUTCB y la Confederación Sindical de Colonos Bolivianos (CSCB) a finales de 1996 para mostrar su desacuerdo con la ley de reforma agraria propuesta por el gobierno. La CIDOB llegó a un acuerdo con el gobierno que satisfacía la mayor parte de sus demandas. La CSUTCB quiso pujar por más y al final no vio cumplidas sus aspiraciones. Esta experiencia enrareció la relación entre las dos organizaciones. El movimiento indígena de Bolivia ha vuelto a resurgir en octubre del 2003, al conseguir los dos líderes indígenas más destacados –Felipe Quispe, secretario general de la CSUTCB y Evo Morales, líder de los cultivadores de coca– aunar a sus afiliados en una movilización estatal que consiguió derrocar al presidente Sánchez de Lozada y logró que se archivara el acuerdo propuesto para vender gas natural a los Estados Unidos y México. Quispe y Morales, representantes de los dos nuevos partidos políticos indígenas presentes en el Congreso Nacional han conseguido que los intereses de la mayoría indígena ocupen un lugar destacado en la agenda del gobierno.

En Perú, las organizaciones indígenas a nivel nacional que en Ecuador y Bolivia, ellas la prominencia de las ideologías que la mayoría de la población cree este país con la etnia indígena; en 1960; un sistema legal que tradiciones y altas por separado, lo que ha hecho Luminoso, durante la década de los líderes rivales de facciones subyacentes de etiquetar como «terrorismo» tación masiva a las ciudades durante genas de sus territorios tradicionales. Mallón, 1998: 97-98; Rénique, 1998: julio del 2002; Richard Chase Smith y defensa de los territorios indígenas los países vecinos, el desarraigo derivado al movimiento peruano de

No obstante, no se puede decir que los étnicos en Perú o que no exista la presión de los presidentes Alberto Fujimori al deseo de la mayoría de los peruanos que tradicionalmente han dominado más débil que los movimientos indígenas se fraguó un movimiento indígena desunión orgánica entre las tierras Interétnica de la Selva Peruana y las Amazónicas del Perú (CONAP) se ha resultado de la fusión de varias federaciones de que varios grupos abandonarían las tierras altas, dos confederaciones rivales de Perú (CCP) fue creada en 1947, controlaban el movimiento campesino. Armadas gestó la Confederación Interétnica, pero ésta se hizo más radical, pero ésta se hizo una organización nacional que uniera ambas. Indígenas del Perú (COPPIP). Su principal propósito es principalmente por medio de la federación de comunidades: la AIDASEP y una nueva organización de Comunidades Afectadas por la Minería para reunir a comunidades afectadas por la minería en la organización indígena convocatoria. En el 2002 tenía 1.135 comunidades representadas.

indígenas de Bolivia y Ecuador. El movimiento peruano ha cosechado pocos logros políticos sustantivos, pero ha conseguido afianzar una relación directa con el gobierno peruano por medio de la creación de una serie de grupos de trabajo *ad hoc*. Desde la derrota estratégica de Sendero Luminoso y el derrocamiento del presidente Fujimori, el movimiento indígena peruano se ha vuelto más activo y ha conseguido atraer una mayor atención del Estado peruano y de los donantes internacionales.

A pesar de representar a una ínfima parte de la población, las organizaciones indígenas de Colombia y Venezuela han conseguido movilizar a miles de electores en decisivos actos políticos que han desembocado en la consecución de muchos de los derechos, tanto simbólicos como sustantivos, que reclamaban. Estos movimientos se han visto menos afectados por diferencias regionales que en la región de los Andes centrales. En Colombia, la mayoría de las comunidades indígenas están asociadas a la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), formada en 1982. El principal impulsor para la creación de la ONIC fue la organización departamental Consejo Regional Indígena de Cauca (CRIC), que se había formado una década antes. Una organización menos clasista y más étnica, las Autoridades Indígenas de Colombia (AICO), surgió en Cauca en 1977. En la actualidad, la ONIC tiene filiales regionales en doce departamentos, así como docenas de federaciones étnicas de menor nivel y organizaciones zonales. En Venezuela, el Consejo Indio de Venezuela (CONIVE), constituido en 1989, representa a la mayoría de pueblos indígenas, a excepción de aquellos afiliados a partidos políticos tradicionales. Sus 60 filiales representan a 30 pueblos diferentes, siendo las más importantes las de los Estados de Amazonas, Bolívar y Zulia.

II. REFORMA INSTITUCIONAL PARA MEJORAR LA REPRESENTACIÓN CIUDADANA

En la década de 1990, los países andinos emprendieron reformas constitucionales para intentar modernizar la ineficaz burocracia estatal y recuperar la legitimidad de unos regímenes democráticos decadentes. Estos procesos respondieron a la demanda popular por una mayor participación y representatividad, así como a los esfuerzos de la élite política por potenciar la legitimidad y la gobernabilidad de instituciones estatales que se encontraban en un punto muerto, incapaces de solucionar sus problemas y asfixiados por la corrupción. Todos incorporaron similares y extensas reformas jurídicas inspiradas en las constituciones europeas, el derecho internacional y los organismos multilaterales, en especial el Banco Interamericano de Desarrollo (Jarquín y Carrillo, 1998: 152-153; Landa y Faúndez, 1996). El fortalecimiento de los sistemas judiciales facilitó la adopción y entrada en vigor de Convenios Internacionales de Derechos Humanos en defensa de los colectivos más desfavorecidos.

En el marco de esta búsqueda por la renovación política nacional, los movimientos indígenas presentaron una serie de propuestas para definir una identidad nacional más integradora en términos culturales. Fueron estas asociaciones las que impulsaron un importante debate sobre el concepto de ciudadanía y el fracaso del proyecto homogeneizador llevado a cabo por las élites tradicionales. Estos cinco países introdujeron

en la década de 1990 en sus constituciones la definición de la identidad étnica y cultural de cada nación. Más allá, al reconocer específicamente los derechos de sus sociedades (véase la Tabla 1). Estos cambios abrieron nuevos temas en la agenda política nacional y una mayor y más sustantiva aceptación de su

DERECHOS CONSTITUCIONALES		
	Colombia 1991	
Reconocimiento expreso	«El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación Colombiana». (art. 7)	«El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación Colombiana». (art. 7)
Derecho consuetudinario ^a	sí	sí
Propiedad colectiva	sí	sí
Oficialidad de las lenguas indígenas	En los territorios indígenas	En los territorios indígenas
Educación bilingüe	sí	sí
Cuota reservada de representación en el gobierno	Sí, en el Senado	Sí, en el Senado
Derechos de la raza negra	Derechos limitados sobre territorio y autogobierno	Derechos limitados sobre territorio y autogobierno
Régimen de autonomía	Sí, los «resguardos» se equiparan a las municipalidades	Sí, los «resguardos» se equiparan a las municipalidades

a. En la mayoría de los casos, el derecho consuetudinario es limitado por los códigos de Derechos Humanos y el derecho público.

b. La Constitución de 1993 contempla la posibilidad de que los pueblos indígenas tengan un régimen de autonomía.

En Colombia (1991), Ecuador (1998) y Venezuela (1999), los activistas indígenas participaron como miembros con derecho de voto en las Asambleas Constitutivas. En Ecuador, los indígenas obtuvieron siete representantes en la Asamblea Constitutiva por medio del nuevo partido político sustentado por la CONAIE, el *Pachakutik* (véase más abajo). En Colombia resultaron elegidos dos delegados indígenas y uno fue nombrado para representar a una guerrilla indígena desmovilizada (Quintín Lame). En Venezuela, la población indígena eligió a tres representantes estipulados por ley, a la par que otros dos delegados indígenas resultaron elegidos en competencia libre con representantes no indígenas de los diferentes distritos regionales. En los tres países, los delegados indígenas participaron activamente en el debate sobre la naturaleza de la ciudadanía, contribuyendo a aportar una definición más participativa que defendiera, por ejemplo, la legalización de instrumentos democráticos más directos. Todos ellos se adhirieron a bloques de centro-izquierda que eliminaron las barreras institucionales que frenaban la participación en política. Su eficaz labor en los procesos de reforma constitucionales les permitió adquirir una experiencia directa de compromiso fructífero con la élite estatal y política y a la vez ser conscientes de la firmeza de sus reivindicaciones y de su respaldo popular. Los delegados indígenas en el Congreso sellaron alianzas con un amplio espectro de aliados solidarizados con su causa, mientras que la exhaustiva y desproporcionada atención que suscitaron en los medios de comunicación los convirtieron en figuras nacionales (Van Cott, 2000, 2002, 2003a).

En Bolivia y Perú, los activistas y las organizaciones indígenas tuvieron menos acceso al proceso de reforma constitucional. En Bolivia, la organización de las tierras bajas CIDOB y algunas de las facciones más moderadas del movimiento campesino del Altiplano mantuvieron reuniones frecuentes con delegados del gobierno de Sánchez Lozada para supervisar las reformas constitucionales introducidas entre 1994 y 1997. Entre todos consiguieron afianzar su reconocimiento como pueblo diferenciado, así como una serie de importantes derechos sustantivos concernientes a la propiedad colectiva de la tierra, el derecho a hacer valer su particular «derecho consuetudinario», el derecho a participar –sin voto– en los procesos de toma de decisiones del gobierno local y el derecho a una educación bilingüe. Sin embargo, la imposibilidad de que los representantes indígenas pudieran negociar en igualdad de condiciones con los otros miembros del Congreso al no convenirse la creación de una Asamblea Constitutiva, supuso la obtención de unos derechos menos satisfactorios que los de los otros tres países donde los indígenas tuvieron una participación directa. Por este motivo, las organizaciones indígenas bolivianas se movilizaron entre los años 2002 y 2003 a favor de la creación de una Asamblea Constitutiva en la que tuvieran una representación más justa. A raíz del derrocamiento del presidente Sánchez de Lozada en octubre del 2003, la convocatoria de una Asamblea Constituyente ha pasado a ocupar un lugar central en la agenda política.

En Perú, las organizaciones indígenas eran demasiado débiles para poder obtener representación en el Congreso Constituyente de 1993. El presidente Fujimori, que era contrario a otorgar derechos a los indígenas, tenía control absoluto sobre el Congreso y rechazó sus demandas, lo que supuso un serio revés para los indígenas peruanos. Desde

que tomara posesión del cargo en un proceso participativo de reforma han visto cómo sus propuestas en la propuesta de Constitución del 2000.

El Estado actual de los derechos conseguidos por medio de Asambleas Constitutivas y delegados indígenas abarcan una serie de logros: (1) el reconocimiento constitucionalismo multicultural (1) el reconocimiento explícito de su identidad (2) el reconocimiento legítimo y protección de tierras colectivas (3) el derecho a una educación bilingüe y (4) Este modelo refleja el compromiso firmado por medio de la Convención 169 de la OIT entre los Estados indígenas y tribales. Entre ellos estaban Bolivia, Colombia y Ecuador (Van Cott, 2003b: 8). El caso de Bolivia no se refiere a la *status* de lengua oficial a las hablas indígenas, aún más insatisfactoria, al retirarse de la anterior Carta Magna, a la vez que las tierras colectivas al permitir que los indígenas. El derecho a la educación

Por otro lado, algunas de las reformas otorgaron cargos públicos a los indígenas y a nivel estatal o regional. Esto último es un espacio geográfico autónomo que se define en función de sus propias reivindicaciones comunes sobre la que se debate en todo el mundo. Tales espacios geográficos son inherentes e inalienable de la tierra, constituyendo el núcleo de las culturas indígenas. Los indígenas fueron en un Senado compuesto por tres escaños en la Asamblea Nacional y cámaras municipales de aquellos países (Van Cott, 2003b: 8). En ambos casos, aunque cualquiera puede votar, es importante que aquellos indígenas que representan su puesto en favor de los que representan su pueblo, atendiendo al artículo 12 de la Ley de Participación Ciudadana estableció una cuota de representación para los indígenas que acudieron a las elecciones.

5. Colombia y Bolivia en 1991,

la región del Amazonas y no se dictó ninguna orden explícita sobre la inclusión de candidatos indígenas en las listas.

Todas las constituciones y leyes andinas, a excepción de las de Bolivia, contemplan la creación de «municipalidades indígenas», en las que éstos puedan gobernarse de acuerdo con sus costumbres y hacer valer su derecho consuetudinario. En Colombia, los «resguardos» indígenas, que representan la cuarta parte del territorio nacional, disfrutan del mismo *status* que las demás municipalidades autónomas del país, así como de los derechos especiales y recursos específicos de los resguardos. La Constitución de 1991 contempla la posible agrupación de éstos en extensas Entidades Territoriales Indígenas. De manera parecida, la Constitución de 1998 de Ecuador concede un margen para la creación de Circunscripciones Territoriales Indígenas de gran extensión geográfica, pero la agitación política y la falta de un consenso general dentro del movimiento indígena han retrasado la ejecución de estas leyes. En Bolivia, los distritos indígenas adscritos a las municipalidades no gozan de ninguna autonomía. El actual borrador de la Ley de Reforma Constitucional sí contempla la creación de municipalidades indígenas autónomas.

Incluso en aquellos lugares en los que las propuestas de derechos étnicos lograron superar la oposición de las élites en Asambleas Constituyentes y Congresos, las organizaciones indígenas se enfrentan a menudo a una intensa resistencia por parte de las élites a su aplicación. En Colombia, los legisladores que representan a las élites rurales han bloqueado la aprobación de leyes parlamentarias que permitan establecer las extensas circunscripciones territoriales antes mencionadas durante más de 10 años. En Bolivia, el gobierno de Banzer-Quiroga (1997-2002), que recibió un apoyo considerable de los rancheros de las tierras bajas, paralizó el reparto de tierras en las tierras bajas orientales decretadas durante el mandato de Sánchez de Lozada (1993-1997). Los indígenas han solicitado repetidamente la protección de sus derechos a los tribunales y defensores de los Derechos Humanos de Bolivia, Colombia, Perú y Venezuela; así como contra la violencia de las élites contra las comunidades y líderes indígenas más reivindicativos, sobre todo en zonas rurales. Además de los nuevos derechos constitucionales conseguidos, en la década de 1990 los pueblos indígenas lograron introducir en el entramado de la burocracia estatal a un paladín que los defendiera: las Defensorías del Pueblo se institucionalizaron en Colombia en 1992, en Perú en 1996, en Ecuador en 1997, en Bolivia en 1998 y en Venezuela en 1999. Algunas de ellas han prestado especial atención a salvaguardar los derechos de los pueblos indígenas, sobre todo en Colombia.

III. MEJORA DE LA REPRESENTACIÓN POR MEDIO DE PARTIDOS POLÍTICOS

Sólo en Bolivia, donde los pequeños partidos *Kataristas*⁶ obtuvieron algunos escaños parlamentarios en la década de 1980, se habían creado partidos indígenas con anterioridad a la década de 1990. Los onerosos requisitos exigidos para acceder al voto, así

6. Así llamados al adoptar el nombre del caudillo indio del siglo XVIII Tupaj Katari.

como la lealtad debida a partidos iniciales vehículos electorales pueden en organizaciones sociales que prueban lealtad a los partidos en organizaciones indígenas modificar la movilización social realizadas al implementar una estrategia dual que combinaba la lealtad pendiente. Aunque se siguió promulgar políticas por medio de las organizaciones indígenas más consolidadas de electorales y consiguieron obtener un éxito. Para lograr esto, se vieron beneficiados la descentralización fue la más importante. Los partidos se entrenaron a un nivel regional donde la presencia y la descentralización proporciona un espacio para las reivindicaciones principales sobre el derecho a autogobernarse. La agresiva eliminación de las barreras en lugares en Colombia, Ecuador y Venezuela permitió a los movimientos sociales presentarse como partidos políticos. La Compañía de Organizaciones indígenas operar sin tener en Ecuador, la prohibición de formar organizaciones particulares y organizaciones sociales vivencia en la que pudieran aglutinarse ya no necesitan registrar a sus miembros. Los tres deben ser las provincias más pobres que están en la costa, donde la descentralización resulta bastante beneficiosa (Birkbeck, 1999).

7. El más influyente fue el Movimiento creado en 1985. En 1993, Víctor Hugo Licón MNR-MRTKL, resultó elegido vicepresidente y participó en las elecciones del 2002, ya en 1999.

8. En Perú, la descentralización aprobó en el 2002 la nueva Ley de Regiones, que había desmantelado en 1993. En Ecuador, la transición democrática de 1983. En Colombia, se extendió a los departamentos en 1991, tras la transición que sentó las bases del proceso. En Venezuela, se aprobó en 1989.

Los partidos indígenas también se han visto beneficiados por la fragmentación y redistribución interna de los partidos, que amplía la esfera política a las nuevas candidaturas. De hecho, la formación de partidos indígenas viables en la década de 1990 no es sólo un indicador de la madurez y consolidación de los movimientos indígenas, sino también de la debilidad e inestabilidad de los sistemas políticos. Los partidos indígenas tienen más éxito allí donde la organización indígena originaria está más arraigada y unificada y cuenta con una red extensa de filiales repartidas por toda la geografía. En la política nacional, estos partidos progresan cuando se integran en coaliciones de izquierdas antineoliberales que trascienden la reivindicación de demandas etnoculturales y donde las organizaciones indígenas más experimentadas y combativas engendran partidos que absorben los restos de partidos de izquierdas con pobres resultados electorales, así como intelectuales independientes y movimientos sociales menos dinámicos. Por medio de su interacción con sectores no indígenas de clase baja y media, dichos partidos articulan un discurso que enlaza el impulso indígena hacia la autodeterminación y el objetivo tradicional de la izquierda de bloquear y revertir las políticas económicas neoliberales.

El partido indígena de mayor éxito entre los recién creados es el Movimiento de Unidad Plurinacional *Pachakutik*-Nuevo País (*Pachakutik*) de Ecuador, fundado en 1995, justo después de que se introdujeran las medidas para facilitar el acceso al voto discutidas anteriormente y a raíz de la exitosa campaña llevada a cabo por la CONAIE para rechazar la propuesta de reforma neoliberal del presidente Sixto Durán Ballén. Esta experiencia demostró a los líderes de la CONAIE el poder de convocatoria y apoyo popular del movimiento indígena y sirvió para convencerlos de que un vehículo electoral podría tener éxito (Sánchez López y Freidenberg, 1998: 72). En su primera pugna electoral en 1996, el partido *Pachakutik* obtuvo ocho escaños de los 82 que componen el Parlamento Nacional, convirtiéndose en la cuarta fuerza de un Congreso bastante fragmentado. El partido repitió éxito en las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente de 1997 y en los comicios estatales de 1998. En el 2000 experimentó un aumento significativo en las elecciones regionales, al imponerse en 5 de las 22 prefecturas y 25 de las 215 alcaldías y obtener un 60% de la representación en los consejos consultivos municipales. En el 2002, el *Pachakutik* formó una alianza electoral con el Partido Sociedad Patriótica (PSP), el partido de Lucio Gutiérrez, un antiguo alto cargo militar que se había unido al presidente de la CONAIE, Antonio Vargas, en la breve intentona golpista de enero del 2000. La coalición PSP-*Pachakutik* ganó las elecciones presidenciales, lo que garantizó al *Pachakutik* la titularidad de las carteras de Relaciones Exteriores y Agricultura. El *Pachakutik* obtuvo cinco escaños del Congreso por su cuenta, seis en coalición con el PSP y tres más por medio de acuerdos con otros partidos⁹. Sin embargo, debido a divergencias políticas, la coalición se disolvió en agosto del 2003.

En Bolivia, el impulso para formar un vehículo electoral indígena se gestó dentro del combativo movimiento de los cultivadores de coca, aunque había sido el motivo de

debates internos del CSUTCB desde las elecciones municipales de Bolivia en 1995 (ASP). El ASP obtuvo 10 alcaldes, 4 escaños y logró cuatro escaños intransferibles del voto constituía el mejor resultado en las elecciones nacionales hasta esa fecha. El partido dirigió el partido. Los incondicionales del partido obtuvieron 5 concejales y 5 alcaldes en las elecciones locales, lo que representaba un 1,12% del total de los votos que llevaron a los comicios. El partido de la Izquierda Republicana (NFR), cortejó con éxito a los sectores privilegiados en las listas. Los sectores apoyados por el movimiento indígena, propició que todos los partidos de las elecciones del 2002, en especial el Movimiento de la Izquierda

Después de la escisión de 1995, se formó un nuevo partido, el Instru. Valiéndose del registro en vigor, el partido obtuvo concejales en siete de los nueve departamentos del partido como fuerza política cuando Morales se convirtió en jefe de gobierno y político. Entretanto, el populismo típicamente indígenas de las tierras altas paró en el 2002 un 20,94% del total de los diputados. El partido terminó segundo tras el ganador. En la actualidad, el partido es el segundo partido indígena, el Movimiento Patriótico general de la CSUTCB, Felipe Morales en los comicios del 2002. El MIP contó con cinco diputados. Los analistas políticos coinciden en que el conjunto obtenido por los partidos de izquierda por el MNR, que resultó vencedor en las elecciones de manera evidente. Aparte de los legisladores indígenas ocuparon los escaños del MNR y NFR¹².

9. La FEINE creó el partido *Amauta Jatari* a mediados de la década de 1990 para competir con *Pachakutik*. En el 2002 fue el partido menos votado, con menos de un 1% de los votos.

10. Según Alejo Véliz (entrevista, 2003), el partido obtuvo 22 escaños al ASP, que tomó prestados los votos.

11. Entrevistas con Marcial Huneeus, 2003; *Los Tiempos*, 20 de junio de 2002.

12. Los analistas no se ponen de acuerdo sobre el resultado. W. RIVERO (2003: 21) y *La Razón*, edición del 2003.

La formación de partidos políticos propios no ha sido una de las mayores prioridades de las organizaciones indígenas de Perú. Algunas animan a sus miembros a alistarse en partidos ya existentes con capacidad para ganar. El CCP ha establecido alianzas formales con algunos partidos. Por ejemplo, dio su apoyo a la candidatura presidencial de Toledo en los años 1999 y 2001 y algunos de sus líderes estaban incluidos en su papeleta de Perú Posible¹³. El CNA anima a sus afiliados a centrarse en las elecciones locales y evitar implicarse en asuntos de política nacional que podrían dividir el movimiento. Animados por el éxito de los partidos indígenas de Bolivia y Ecuador, en julio del 2002 algunos líderes campesinos expresaron su deseo de crear su propio vehículo electoral para los próximos comicios nacionales¹⁴. La organización de la Amazonía AIDESEP aprobó la creación de un nuevo partido, el Movimiento Indígena de la Amazonía Peruana (MIAP), en su Congreso Nacional de 1996 (MIAP, 2001: 1). Según el líder de la AIDESEP, Wrays Pérez, el MIAP y sus candidaturas filiales consiguieron auparlo al poder a 13 alcaldes indígenas en varias provincias amazónicas en las elecciones municipales de 1998 (entrevista, Lima, 11 de julio del 2002)¹⁵. En el 2002, el MIAP sólo pudo inscribir su candidatura en una provincia; en las demás concurrió en coalición con otros partidos registrados, sobre todo con Perú Posible. Según León (2002: 24), los indígenas amazónicos se alzaron con el poder en siete alcaldías, todas ellas por medio de alianzas entre el MIAP y partidos registrados. El MIAP ha sido incapaz de recoger las 50.000 firmas necesarias para registrar el partido en elecciones que trasciendan el nivel municipal. Sus líderes esperan poder hacerlo en las elecciones del 2006 y así acomodar en el partido a los indios afro-peruanos y andinos (entrevista, Wrays Pérez). Otro impedimento a su éxito electoral ha sido el fraude, que ha impedido a algunos de los candidatos electos del MIAP ocupar su cargo (entrevista, Jorge Agurto, Lima, 11 de julio del 2002; Defensoría del Pueblo, 2000: 11-13).

En Colombia han surgido varios partidos indígenas en los últimos años. El de mayor éxito ha sido Alianza Indígena Social (ASI), que compitió por primera vez en las elecciones locales y nacionales de 1991. El CRIC, en coalición con las guerrillas desmovilizadas de Quintín Lame y otras organizaciones populares, creó el ASI para competir en las primeras elecciones tras la convocatoria de la Asamblea Constituyente. El ASI obtuvo un senador en competencia abierta con los candidatos y partidos no indígenas en 1991 y en 1994 obtuvo 8 alcaldes, 84 concejales y 3 diputados departamentales. En coalición con otro partido, designó a la líder afro-colombiana Zulía Mena

13. Uno de ellos, Paulina Arpasí, se convirtió en la primera mujer indígena en ocupar un escaño del Congreso en el 2001.

14. Entrevistas, Wilder Sánchez, Lima, 12 de julio del 2002; Néstor Guevara, Cuzco, 23 de julio del 2002.

15. Documentos del AIDESEP y entrevistas con militantes indican que entre 12 y 14 alcaldes ocuparon sus cargos a fecha de julio del 2002, aunque no todos ellos concurrían con el MIAP. Muchos de ellos concurrieron a los comicios en las filas de Perú Posible o Somos Perú; otros se agruparon en partidos políticos indígenas para competir en las elecciones municipales de 1998 (DEFENSORÍA DEL PUEBLO, 2000: 11-13).

como representante por el distrito. En 1997, el ASI ganó su primer escaño. En el 2000, el ASI se alió con el partido de Colombia (AICO), para elegir al primer alcalde en 11 alcaldías en cuatro departamentos y ocho diputados entre los ganadores de las elecciones del 2003 y 146 concejales municipales. Pese al tamaño de la población indígena y de los recursos económicos escasos, el movimiento es exitoso. En su análisis sobre el proceso de formación surgidos tras la reforma política, León observó que el ASI es uno de los partidos con más del 2% de los 1.100 municipios. Uno de los ocho partidos que han ganado, el éxito parece ser la habilidad de su base de la población, particularmente de las mujeres indígenas.

En Venezuela, los partidos indígenas han ganado en Amazonas, donde la población indígena es la mayoría. Los Pueblos Indígenas de Amazona (PIA) de Amazonas (PUAMA) en 1997 para ganar la Constitución del Estado de Amazonas. En la Asamblea Estatal de 1998 y otros años, el PIA en coalición con el partido de la mayoría ganó a un gobernador indígena en Amazonas y a un diputado en la Asamblea Legislativa de Amazonas municipales.

Aparte de los retos a los que se enfrentan los partidos indígenas deben superar los obstáculos que compitan en los comicios y usarlos para despojar a menudo a firmar documentos de los concejales municipales para incriminarlos. En Colombia, sus solicitudes de registro eran a menudo rechazadas por los partidos tradicionales. Por ejemplo, en Quispe, el Movimiento Indígena de la Amazona (PIA) del voto indígena (Van Cott, 2000) ganó a la inclusión del PUAMA en el 2001. Los políticos tradicionales acusaron al PIA de «manipulación» manipulada por la Iglesia.

16. Los políticos de raza negra comenzaron a ganar hasta el 2001 (entrevista con Piedra).

IV. CONCLUSIONES

¿Cómo se explica esta mayor representatividad de los pueblos indígenas en un momento en el que los sistemas de representación están en crisis y la mayoría de los agentes de la sociedad civil se afanan por alzar sus voces y conseguir una cierta influencia política? En primer lugar, el movimiento indígena se está beneficiando de unas reformas institucionales que han reducido las barreras existentes para la participación formal en política y han habilitado un espacio para formas de participación novedosas. En segundo lugar, con la pérdida de respaldo popular de los partidos políticos tradicionales y la fragmentación del sistema de partidos se ha abierto una puerta a la entrada a las nuevas formaciones, situadas sobre todo a la izquierda del espectro político. En tercer lugar, las organizaciones indígenas cuentan con el respaldo de las redes de organismos internacionales que defienden los derechos de los pueblos indígenas. Algunos influyentes organismos internacionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Unión Europea, países solidarizados con la causa y ONG's ejercen una cierta presión sobre gobiernos débiles, que dependen de la ayuda externa, para que éstos accedan a las demandas de los indígenas (Brysk, 2000). Las élites políticas, conscientes de los cambios en las pautas y el discurso en defensa de los derechos humanos a escala global y que desean ser vistas como cumplidoras de los mismos, se muestran cada vez más receptivas a estas demandas. Los organismos multilaterales, presionados por las redes internacionales por los derechos indígenas, sobre todo de Estados Unidos y Europa, han modificado sus políticas de préstamos y de desarrollo de tal manera que se exige a los gobiernos que protejan las culturas indígenas y mantengan consultas con sus representantes.

Otro motivo de este ascenso son los votantes que buscan una alternativa al sufrimiento causado por los ajustes estructurales y la corrupción de la élite política y que han tenido pocas opciones de voto en los últimos 10 años. Los movimientos indígenas no sólo han articulado una alternativa antineoliberal y antiglobalización, sino que también han desafiado abierta y explícitamente el proyecto de homogeneización nacional iniciado por la minoría de raza blanca subordinada a los poderes económicos y políticos extranjeros. Este hecho se ha visto más claramente en Bolivia, donde el líder de los cultivadores de coca y candidato presidencial Evo Morales se ha ganado el apoyo de los votantes de clase media al manifestarse contra la Embajada de los Estados Unidos, a la vez que desprestigiaba a sus antagonistas al tacharlos de antibolivianos e interesados testafieros de los intereses norteamericanos. Irónicamente, la población no indígena, anhelante de una identidad nacional más auténtica y desafiante, se ha alineado cada vez más con los contranacionalismos representados por los movimientos indígenas. Los pueblos indígenas reclaman unas formas de gobierno «más auténticas» que las élites estatales y políticas. Ellos simbolizan una nueva era de legitimidad e integración política¹⁷.

17. Los presidentes de Colombia y Venezuela, César Gaviria y Hugo Chávez, así lo afirmaron en el transcurso de las Asambleas Constituyentes de sus respectivos países.

Por último, en América Latina particularmente intenso en los Andes de las Américas son más intertextuales, los lazos históricos y culturales, las fronteras nacionales y las políticas migratorias influyen en las actividades del movimiento indígena. En América Latina el movimiento indígena en América Latina trabajan exclusivamente en los países que fortalezcan el encuentro entre los pueblos y a ampliar la relativamente mayor presencia de los centroandinos. Durante la fase de las organizaciones indígenas se reorganizaron. En América Latina habían introducido reformas: la reforma agraria en Bolivia y a los líderes indígenas bolivianos y los líderes venezolanos estudiaron la experiencia de los líderes se reunieron con los representantes de los pueblos. Este efecto diluyente es la razón por la que en América Latina (pero no la de Perú) son las más avanzadas las organizaciones indígenas. También es apreciable este efecto en la formación de partidos políticos indígenas en Ecuador inspiró a las organizaciones indígenas a pesar de contar con un ambiente hostil.

El movimiento de los pueblos indígenas en múltiples frentes —en las calles, en los tribunales, en la defensa de los derechos de este sector de la población— se ha hecho con unos espacios que se han ido abriendo. Está por ver si serán capaces de transformar al Estado en movimientos eficaces y de canalizar una forma alternativa y «

V. BIBLIOGRAFÍA

- ALCÁNTARA SÁEZ, Manuel y FREIDENBERG, David. *América Latina Hoy*, 2001, vol. 30.
BIRNIR, Johanna Kristin. The Effect of the 1994 Constitution on the Indigenous in Bolivia, Ecuador and Peru. *Papers of the Latin American Studies Association*, vol. 36, no. 1, 2003.
BRYSK, Alison. *From Tribal Village to National State in Latin America*. Stanford: Stanford University Press, 2000.
CUNIN, Elisabeth. La política étnica en Colombia. *Revista de la Universidad de los Andes*, marzo de 2002 en Colombia.
DE LA CADENA, Marisol. *Indigenismo and the State in Peru, 1919-1991*. Durham: Duke University Press, 1995.

- DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Situaciones de Afectación a los Derechos Políticos de los Pobladores de las Comunidades Nativas. *Serie Informes Defensoriales*, 2000, n° 34. Lima.
- DIETZ, Henry y MYERS, David. The Process of Party System Collapse: Peru and Venezuela Compared. Estudio presentado en el *Congreso de la Latin American Studies Association*. Washington, D.C., 2001.
- FERNÁNDEZ FONTENOY, Carlos. Sistema político, indigenismo y movimiento campesino en el Perú. En MASSAL, Julie y BONILLA, Marcelo (eds.). *Los movimientos sociales en las democracias andinas*. Quito: FLACSO, IFEA, 2000, pp. 193-211.
- GARCÍA SÁNCHEZ, Miguel. La Democracia Colombiana: Entre las reformas institucionales y la guerra. Una aproximación al desempeño de las terceras fuerzas en las alcaldías municipales, 1988-2000. Estudio elaborado para su presentación en el *Congreso de la Latin American Studies Association*. Washington, D.C., 2001, septiembre 6-8.
- JARQUÍN, Edmundo y CARRILLO, Fernando (eds.). *Justice Delayed: Judicial Reform in Latin America*. Washington: Inter-American Development Bank, 1998.
- LANDA, César y FAÚNDEZ, Julio (eds.). *Contemporary Constitutional Challenges*. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, 1996.
- LEÓN, Jorge. *La política y los indígenas en América Latina: La redefinición de las relaciones entre el Estado y los pueblos indígenas*. Elaborado por encargo de Oxfam América y la Ford Foundation, 2002.
- LEVITSKY, Steven y CAMERON, Maxwell. Democracy without Parties? Political Parties and Regime Collapse in Fujimori's Peru. Estudio elaborado para su presentación en el *Congreso de la Latin American Studies Association*. Washington, D.C., 2001, septiembre 6-8.
- Los Tiempos*. Campesinos: las nuevas «vedetes» electorales. *Los Tiempos* (Cochabamba), edición on-line, 2002, 4 de abril.
- MAINWARING, Scott y SCULLY, Timothy. *Building Democratic Institutions: Party Systems in Latin America*. Stanford: Stanford University Press, 1995.
- MALLÓN, Florencia. Chronicle of a Path Foretold? Velasco's Revolution, Vanguardia Revolucionaria and «Shining Omens» in the Indigenous Communities of Andahuaylas. En STERN, Steve (ed.). *Shining and Other Paths. War and Society in Peru, 1980-1995*. Durham: Duke University Press, 1998, pp. 84-117.
- MIAP. *El MIAP y su aporte a la construcción de un nuevo Perú*. Satipo: Mimeo, 2001.
- PRODEPINE. *Censo nacional de organizaciones indígenas y negras e índice de fortalecimiento institucional*. Quito, Ecuador: PRODEPINE, 1998.
- RÉNIQUE, José Luis. *Los sueños de la sierra. Cuzco en el siglo XX*. Lima: CEPES, 1991.
- RIVERO, Wigberto. *Indígenas y campesinos en las elecciones: El poder de la Bolivia Emergente*. Publicado en www.developmentgateway.org, 2003.
- ROBERTS, Kenneth. Party-society Linkages and Democratic Representation in Latin America. *Canadian Journal of Latin American and Caribbean Studies*, 2002, vol. 27, n° 53, pp. 9-34.
- RODRÍGUEZ, Alfredo. Se profundiza la división entre indígenas. *El Deber*, 2002, 29 octubre, on-line.
- ROMERO, Aníbal. *Decadencia y crisis de la democracia*. Caracas: Editorial Panapo, 1994.
- SÁNCHEZ LÓPEZ, Francisco y FREIDENBERG, Flavia. El proceso de incorporación política de los sectores indígenas en el Ecuador. Pachakutik, un caso de estudio. *América Latina Hoy*, 1998, vol. 19, pp. 65-79.
- SILVERSTON, Melina. *Ethnopolitics in Ecuador: Indigenous Rights and the Strengthening of Democracy*. Miami: North-South Center Press, 2001.
- TANAKA, Martín. *Los espejismos de la democracia: El colapso del sistema de partidos en el Perú, 1980-1995, en perspectiva comparada*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 1998.

- VAN COTT, Donna Lee. Andean Indigenous Movements in Peru and Venezuela in Comparative Perspective. *Latin American Research Review*, 2002, vol. 37, n° 1, pp. 49-70.
- Constitutional Reform in the Andes. En Rachel (ed.). *Multiculturalism in Latin America*. London: Palgrave Press, 2002, pp. 1-15.
- *From Movements to Parties: The Process of Institutional Change*. No publicado, 2003b.
- Institutional Change and Ethnicity. *Latin American Research Review*, 2003c, vol. 45, n° 2, pp. 1-39.
- *The Friendly Liquidation of the State*. University of Pittsburgh Press, 2004.
- WHITEHEAD, Laurence. High Anxiety in Latin America. *Journal of Democracy*, 2001, vol. 12, n° 2, pp. 1-15.